

Selección de artículos de

LE MONDE
diplomatique

La respuesta de Chile ante el Coronavirus
por Izkia Siches

Ya mismo
por Serge Halimi

Hasta el próximo fin del mundo...
por Renaud Lambert y Pierre Rimbart

Mujeres en alto riesgo
por Clara González

Chile: La verdadera vida de las trabajadoras de casa
por Luz Vidal

Endeudamiento y hogares
¿Quién paga la pandemia?
por Andrea Sato

Covid 19 en el epicentro de la violación del derecho humano al agua
por Rodrigo Mundaca

Bioética y biopolítica para un Chile postneoliberal
por Álvaro Ramis

Chile y COVID-19: el sistema de salud y la disciplina social puestos a prueba
por Rafael Urriola U.

Pandemia:
Una excusa para la represión
por Libio Pérez



www.editorialauncreemos.cl
www.lemonediplomatique.cl

203

Selección de artículos de

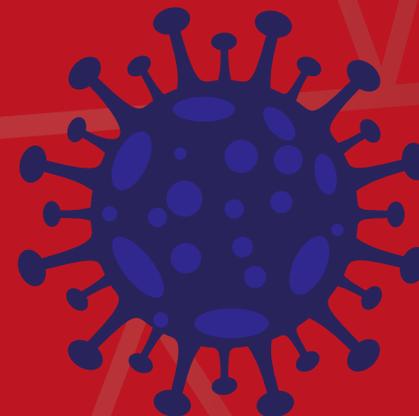
LE MONDE
diplomatique

COVID-19

Nada será igual

Izkia Siches, Serge Halimi, Renaud Lambert, Pierre Rimbart, Clara González, Luz Vidal, Andrea Sato, Rodrigo Mundaca, Álvaro Ramis, Rafael Urriola y Libio Pérez

COVID-19. NADA SERÁ IGUAL



**FRIEDRICH
EBERT**

STIFTUNG

Editorial
Aún Creemos
en los Sueños

Este libro ha sido publicado con el apoyo de la
Fundación Friedrich Ebert

**FRIEDRICH
EBERT 
STIFTUNG**

La editorial AÚN CREEMOS EN LOS SUEÑOS
publica la edición chilena de *Le Monde Diplomatique*.
Director: Víctor Hugo de la Fuente

Suscripciones y venta de ejemplares:
San Antonio 434 Local 14 - Santiago.
Teléfono: (56) 22 608 35 24
E-mail: edicion.chile@lemondediplomatique.cl
www.editorialauncreemos.cl
www.lemondediplomatique.cl

Diseño: Cristián Escobar

Copyright 2020 Editorial Aún Creemos En Los Sueños.

Primera edición: mayo 2020
ISBN: 978-956-340-155-4

ÍNDICE

La respuesta de Chile ante el Coronavirus por Izkia Siches	5
Ya mismo por Serge Halimi	11
Hasta el próximo fin del mundo... por Renaud Lambert y Pierre Rimbart	17
Mujeres en alto riesgo por Clara González	25
Chile: La verdadera vida de las trabajadoras de casa por Luz Vidal Huiriqueo	31
Endeudamiento y hogares ¿Quién paga la pandemia? por Andrea Sato Jabre	37
Covid 19 en el epicentro de la violación del derecho humano al agua por Rodrigo Mundaca	41
Bioética y biopolítica para un Chile postneoliberal por Álvaro Ramis	45
Chile y COVID-19: el sistema de salud y la disciplina social puestos a prueba por Rafael Urriola U.	51
Pandemia: Una excusa para la represión por Libio Pérez	57

Aprendizajes y dificultades en el combate a la pandemia

La respuesta de Chile ante el Coronavirus

por Izkia Siches*

El Coronavirus ha puesto a prueba a los sistemas sanitarios de todo el mundo, que repentinamente se vieron enfrentados a un virus nuevo, con un gran potencial de contagiosidad y letalidad. Los gobiernos se vieron forzados a tomar decisiones drásticas de aislamiento social, para evitar la mayor propagación del mismo y el colapso de la red sanitaria, pues con la experiencia de Italia y España quedó en evidencia que la toma tardía de estas medidas podía disparar la transmisión, elevando así la cantidad de personas con cuadros graves y fallecimientos.

Chile, pandemia y estallido social

En Chile, la pandemia nos encontró en un momento social complejo, después de un estallido social que había reventado la burbuja del “oasis de Latinoamérica”, con una ciudadanía movilizada, autoridades con niveles bajísimos de aprobación y un proceso constituyente en marcha, que tendría como hito relevante el plebiscito del 26 de abril de 2020.

Frente a este escenario y comprendiendo la gravedad de la amenaza sanitaria, como Colegio Médico manifestamos desde el día uno nuestra disposición a trabajar en

*PRESIDENTA COLEGIO MÉDICO DE CHILE. ARTÍCULO PUBLICADO EN LA EDICIÓN CHILENA DE LE MONDE DIPLOMATIQUE, MAYO DE 2020.

conjunto para enfrentar esta crisis y solicitamos insistentemente al gobierno la participación más directa de expertos con experiencia en pandemias, entendiendo la importancia de que las decisiones políticas contaran con un respaldo técnico que diera confianza a la ciudadanía y generaran consenso en la comunidad médica y científica. Esto era de gran relevancia, considerando que, de acuerdo a la experiencia internacional, nuestro país iba a tener que empezar a tomar medidas cada vez más restrictivas, que para muchos podían ser vistas como una manera de acallar el movimiento social. Lamentablemente, esta solicitud tardó en tener eco.

Primeras medidas

Como era de esperar y ante la inminente llegada del virus, el gobierno comenzó a tomar medidas. En enero, el Ministerio de Salud emitió alertas sobre Covid-19 a los departamentos de aduanas e inmigración para que detectaran los casos entrantes mediante un cuestionario voluntario, pero hubo muchos reportes de que este control no estaba siendo eficiente. Luego, el 2 de marzo se comenzó a exigir una declaración jurada obligatoria a todas las personas que ingresaran desde países afectados, no obstante, la cuarentena era opcional en un inicio y los controles a los viajeros fueron débiles y poco sistemáticos. A fines de febrero se decretó Alerta Sanitaria, lo que permitía disponer de más recursos económicos y humanos para preparar la red asistencial.

El 3 de marzo se confirmó el primer caso importado en Chile y días después, el 11, finalmente, el Presidente formó un comité asesor de expertos compuesto por funcionarios de salud pública y académicos. El 14 de marzo, se declaró la fase 3 y desde el Colegio Médico y junto a los alcaldes, comenzamos a exigir un curso de acción más drástico, incluido el cierre de escuelas y universidades a nivel nacional.

El domingo 15 de marzo se anunciaron una serie de medidas que incluían un proyecto de ley para permitir que algunos reclusos cumplieran sus condenas bajo arresto domiciliario, la prohibición de eventos con 200 o más asistentes y la cuarentena para adultos mayores y

hogares de menores. El Colegio Médico siguió exigiendo medidas más estrictas, como prohibir los eventos masivos y hacer que el test fuera gratuito, para avanzar en la estrategia de identificar los casos y aislarlos.

La presión social y el gobierno

Ante la falta de mayores definiciones por parte del gobierno, las universidades tomaron iniciativa propia de suspender clases presenciales, a lo que se sumaron algunos colegios y municipios. El Presidente no tuvo más alternativa que ceder y decretar el cierre de las escuelas del país desde el 16 de marzo. Recientemente, el ministro de Salud ha afirmado públicamente haber estado en contra de esta medida, dando a entender que fue la presión de otras voces la que facilitó su ejecución.

Chile llegó a 100 casos confirmados el 16 de marzo y se declaró la fase 4 de la pandemia. La campaña de vacunación contra la influenza comenzó en paralelo, generando aglomeraciones de la población de riesgo en distintas comunas del país. Más tarde, esta misma escena se repitió a fin de mes con aglomeraciones para pagar los permisos de circulación, tras un error en una ley aprobada por el parlamento, que tuvo que ser corregida con un veto presidencial, y hemos visto que recurrentemente ocurren estas situaciones -totalmente evitables- en las sucursales de la Administradora de Fondos de Cesantía, bancos, notarías, entre otros.

La tercera semana de marzo estuvo marcada por falta de definiciones más estrictas. Esta vez fueron los alcaldes quienes tomaron la iniciativa, cancelando eventos, cerrando centros comerciales y declarando cuarentenas preventivas. Desde el Colegio Médico, seguíamos preocupados por las dudas que ponía la ciudadanía sobre las acciones del gobierno, por lo que comenzamos a reunirnos con organizaciones políticas de todo el espectro para discutir la necesidad de reconsiderar la fecha del plebiscito, y con representantes del mundo social para hacer un llamado a quedarse en el hogar y evitar nuevas manifestaciones públicas. Tanto la comunidad médica como otros actores, insistimos en llamar a la ciudadanía a no salir, al mismo tiempo de presionar a las autoridades.

des por una cuarentena obligatoria y cierre de la ciudad de Santiago. En ese momento, el Ministerio de Salud parecía concentrar sus esfuerzos en una batalla comunicacional con la sociedad, más que avanzar en la toma de nuevas definiciones. Era urgente asegurar que las personas se quedaran en casa, pese a que el gobierno no tomara medidas más categóricas con ese objetivo.

El 18 de marzo la presión logra nuevas respuestas. el gobierno finalmente declaró el estado de emergencia y las fronteras se cerraron. Además, el ministro del Interior convocó a un comité de distintas áreas, desde alcaldes, rectores de universidades, exministros y el Colegio Médico en la “Mesa Social Covid-19”. El mismo día se impuso el toque de queda nacional y se han ido decretando cuarentenas en distintas comunas y zonas del país, cordones y aduanas sanitarias, como medidas para disminuir la circulación de personas y el mantener distanciamiento físico. Esto de acuerdo con los datos epidemiológicos, que hasta ese momento no eran compartidos con el Colegio Médico ni las Sociedades Científicas del país. Cabe recordar que estas medidas son tomadas sin ser consultadas con la Mesa Social y, muchas de ellas, tampoco con el Consejo Asesor.

El gobierno, presionado por otros actores políticos y sociales, ha ido tomando iniciativas que, sumadas a la destacable acción de una ciudadanía que tomó conciencia de evitar el contacto social independientemente de si su territorio estaba o no en cuarentena, han logrado hasta ahora evitar un alza mayor en el número de contagios.

El problema de los datos

Hemos sido insistentes en visibilizar una falta de transparencia en los datos, fundamentales tanto para el conocimiento de la situación dinámica territorial de la pandemia, como para la toma de medidas sanitarias. El primer informe con datos desagregados por comunas se publica el 30 de marzo, casi a un mes del primer caso. Aún no conocemos la cantidad de test realizados en cada comuna y sus diferencias según las características socioeconómicas de los territorios. En muchos otros países, estos datos se ponen a disposición de la comunidad

científica, con el fin de que puedan analizarlos y aportar con propuestas. Lamentablemente, este hermetismo no solo limita la posibilidad de sumar apoyos técnicos para enfrentar la pandemia, sino que además suma desconfianzas a una ciudadanía a la que se le debe el mayor respeto y agradecimiento por su enorme colaboración a evitar una mayor propagación del virus.

¿Tiempo de relajar medidas?

Por ahora, Chile no ha alcanzado su capacidad de cuidados críticos, aunque algunos lugares como Temuco y Punta Arenas se han visto estresados por la demanda asistencial, teniendo que trasladar pacientes y reforzar su número de camas con ventilación mecánica a más del doble de su capacidad habitual. Si bien los números hasta el momento muestran un escenario “controlado”, esto en ningún caso nos puede permitir ser triunfalistas y relajar las medidas de distanciamiento y confinamiento, pues sin ellas el escenario sería dramático.

Nos parece que aún no es el momento de relajar la estrategia. Peligrosamente, a fines de abril se observa un aumento importante de casos en varias comunas populares del gran Santiago, y núcleos urbanos del Norte Grande, como las ciudades de Iquique y Antofagasta, y al 27 de abril tenemos 6.288 casos positivos, el número más alto de personas con capacidad de transmitir la infección desde el inicio del brote. Es por esto que nos han sorprendido los recientes anuncios gubernamentales sobre el regreso a una “nueva normalidad”, queriendo acelerar el retorno presencial a clases y trabajos, mientras reabre centros comerciales. Ejemplo de aquello fue la iniciativa por el retorno al trabajo presencial de los funcionarios públicos para el pasado 20 de abril, que luego de recibir el rechazo de múltiples reparticiones públicas, agrupaciones de trabajadores y entidades técnicas, incluido el Consejo Asesor nombrado por el mismo gobierno, fue reconsiderada y cambiada por una futura estrategia gradual.

Hoy en Chile y el mundo debemos ser capaces de discutir temas de fondo en materia social, económica y sanitaria, que posibiliten a las sociedades para enfrentar

esta u otras pandemias. Mientras ello no ocurre, hoy la cotidianidad levanta innumerables preguntas que muestran los vacíos que se hacen más evidentes en estas circunstancias ¿Quién y cómo entrega certezas a la tercera edad para quedarse en casa si no tienen con qué alimentarse ni pueden acceder a sus medicamentos? ¿Quiénes se quedan al cuidado de los hijos de los padres que trabajan en el sistema sanitario?

Al parecer nos encontramos en ese momento histórico que nace como necesidad -y abre una oportunidad- de repensar el nuevo orden social, económico y político desde la solidaridad y colaboración, en base a un opo- nente que nos une en un mismo problema.

Desde el Colegio Médico de Chile continuaremos trabajando activamente por proteger a las personas y asegurar las condiciones mínimas necesarias para discutir un cambio de estrategia. Mientras, como en el resto del mundo, seguiremos aprendiendo todos los días sobre este virus y agradeciendo a la ciudadanía y al personal de salud, que con su compromiso han evitado, hasta ahora, situaciones de colapso como se han visto en otras latitudes. ♦

I.Z.

El mundo después de la crisis por el coronavirus

Ya mismo

por Serge Halimi*

Una vez que esta tragedia haya quedado atrás, ¿todo volverá a ser como antes? Cada una de las crisis de los últimos treinta años alimentó la esperanza irracional de una toma de conciencia, un regreso a la razón, un freno. En el imaginario aparecía primero el confinamiento y luego la transformación de una dinámica sociopolítica de la que, al fin, todos habrían podido ver las limitaciones y peligros (1). Se suponía que la estampida bursátil de 1987 iba a contener la oleada de privatizaciones, y que las crisis financieras de 1997 y de 2007-2008 iban a hacer trastabillar la globalización feliz. Eso no sucedió.

A su vez, los atentados del 11 de septiembre suscitaron reflexiones críticas sobre el hubris estadounidense, así como interrogantes afligidos del tipo “¿Por qué nos odian?”. Eso tampoco duró. Lo cierto es que, incluso cuando el movimiento de ideas toma la dirección correcta, nunca es suficiente para detener las máquinas infernales; siempre se necesita la participación de seres humanos. Y cuando eso sucede, más vale no depender de los gobernantes responsables de la catástrofe, incluso si esos pirómanos se ponen melindrosos, hacen los sacrificios necesarios y pretenden haber cambiado. En particular, cuando su propia vida –al igual que la nuestra– está en peligro.

*DIRECTOR DE LE MONDE DIPLOMATIQUE. ARTÍCULO PUBLICADO EN LA EDICIÓN CHILENA DE LE MONDE DIPLOMATIQUE, ABRIL DE 2020.

La mayoría de los franceses no conocimos de manera directa ni la guerra, ni golpes militares, ni toques de queda. Ahora bien, a fines de marzo, cerca de tres mil millones de habitantes estaban en cuarentena, muchos de ellos en condiciones extremadamente difíciles –no son escritores que se dedican a observar las camelias en flor en sus casas de campo–. Pase lo que pase en las próximas semanas, la crisis del coronavirus habrá constituido la primera angustia global de nuestras vidas: eso no se olvida. Los responsables políticos están obligados a tomarlo en cuenta, al menos en parte.

Por lo tanto, la Unión Europea acaba de anunciar la “suspensión general” de sus normas presupuestarias, el presidente francés Emmanuel Macron aplazó una reforma jubilatoria que habría castigado al personal hospitalario y el Congreso de Estados Unidos votó a favor de enviar un cheque a la mayoría de los estadounidenses. Sin embargo, hace poco más de diez años, los liberales ya habían aceptado un aumento espectacular de la deuda, un estímulo presupuestario, la nacionalización de los bancos y el restablecimiento parcial del control de los capitales para salvar su sistema en riesgo. Luego, la austeridad les permitió recuperar lo que habían cedido en ese sálvese quien pueda planetario. Incluso les permitió realizar algunos “avances”: los asalariados trabajan más, más tiempo y en condiciones más precarias; por su parte, los “inversionistas” y los rentistas pagan menos impuestos. Fueron los griegos quienes pagaron el precio más alto de este rescate cuando, en sus hospitales públicos, que estaban en una situación de peligro financiero y con medicamentos en falta, empezaron a verse enfermedades que creían desaparecidas.

Así, lo que en un principio permite pensar en un inesperado cambio de dirección podría desembocar en una “estrategia de shock”. En 2001, una hora después del ataque contra el World Trade Center, la consejera de un ministro británico le envió un correo a altos funcionarios de su ministerio: “Es un día ideal para hacer resurgir e implementar con disimulo todas las medidas que tenemos que tomar”. La consejera no necesariamente estaba pensando en las restricciones continuas a las libertades públicas bajo el pre-

texto de combatir el terrorismo, y menos aún en la guerra de Irak y los innumerables desastres que esa decisión angloestadounidense iba a provocar. Dos décadas más tarde, no hay que ser poeta ni profeta para imaginar la “estrategia de shock” que se delinea.

¿Triunfo del capitalismo digital?

Toda nuestra socialización corre el riesgo de verse transformada por la digitalización acelerada de nuestras sociedades, corolario del “quédate en casa” y el “distanciamiento”. La urgencia sanitaria volverá aún más imperiosa –o absolutamente caduca– la pregunta acerca de si se puede seguir viviendo sin internet (2). Hoy, todos deben llevar consigo un documento de identidad y no faltará mucho para que un teléfono celular no solo sea una herramienta útil, sino una exigencia con fines de control. Además, como las monedas y los billetes constituyen una fuente potencial de contaminación, las tarjetas de crédito y débito, nuevos garantes de la salud pública, permitirán que cada compra sea identificada, registrada y archivada. “Crédito social” a la china o “capitalismo de vigilancia”: la regresión histórica del derecho inalienable a no dejar huella del propio paso cuando no se transgredió ninguna ley se está instalando en nuestras mentes y nuestras vidas sin toparse con otra reacción más que una estupefacción de adolescente inmaduro. Tomar un tren sin dar a conocer su estado civil, usar su cuenta bancaria en línea sin entregar su número de celular y pasear sin ser filmado se había vuelto imposible ya antes del coronavirus. Con la crisis sanitaria, se franqueó un nuevo paso. En París, hay drones que vigilan las zonas de difícil acceso; en Corea del Sur, sensores que alertan a las autoridades cuando la temperatura de un habitante presenta un peligro para la población; en Polonia, los habitantes deben elegir entre instalar una aplicación de verificación de la cuarentena en su celular o visitas imprevistas de la policía a su domicilio (3). En tiempos de catástrofe, este tipo de dispositivos de vigilancia recibe el apoyo popular; no obstante, siempre sobreviven a las condiciones que los vieron nacer.

Una sociedad sin contacto

Asimismo, las transformaciones económicas que se perfilan también consolidan un universo en el que las libertades se restringen. Para evitar cualquier tipo de contaminación, millones de comercios, cafés, cines y librerías cerraron en todo el mundo. Éstos no disponen de servicios de entrega a domicilio ni tienen la posibilidad de vender contenidos virtuales. Tras la crisis, ¿cuántos van a volver a abrir?, ¿en qué condiciones? Por el contrario, los negocios sonrían a los gigantes de la distribución como Amazon, que se prepara para crear cientos de miles de empleos de choferes y operarios de almacén, o Walmart, que anuncia la contratación de ciento cincuenta mil “socios”. Ahora bien, ¿quién conoce mejor que ellos nuestros gustos y preferencias? En este sentido, la crisis del coronavirus podría constituir un ensayo general que anticipa la disolución de los últimos focos de resistencia al capitalismo digital y al advenimiento de una sociedad sin contacto (4).

A menos que... A menos que voces, gestos, partidos, pueblos y Estados alteren ese libreto escrito de antemano. Es común escuchar: “La política no me interesa”. Hasta el día en que cada uno entiende que son elecciones políticas las que obligaron a los médicos a tener que elegir entre qué enfermos van a intentar salvar y cuáles tienen que sacrificar. Estamos en ese día. Y esto es aún más claro en los países de Europa Central, los Balcanes o África, que desde hace años ven cómo su personal sanitario emigra hacia tierras menos amenazadas o empleos mejor remunerados. Esas elecciones tampoco estaban dictadas por las leyes de la naturaleza. Es probable que hoy más gente lo entienda. La cuarentena también es un momento en el que cada uno se toma un tiempo y reflexiona...

Con la intención de actuar. Ya mismo. Es que, contrariamente a lo que sugirió el presidente francés, ya no se trata de “cuestionar el modelo de desarrollo vigente en nuestro mundo”. Sabemos cuál es la respuesta: hay que cambiarlo. Ya mismo. Y como “dejar nuestra protección en manos de otros es una locura”, dejemos de someternos a dependencias estratégicas para preservar un “mercado libre y no distorsionado”. Aunque Macron anunció “decisiones de rup-

tura”, nunca va a tomar las que realmente se necesitan. No solo la suspensión provisoria, sino la denuncia definitiva de los tratados europeos y los acuerdos de librecambio que sacrificaron las soberanías nacionales y erigieron a la competencia como valor absoluto. Ya mismo. Hoy, todos saben cuál es el costo de confiar a cadenas de abastecimiento que se extienden a lo largo y ancho del mundo y que operan sin stock el suministro de los millones de mascarillas y productos farmacéuticos que un país en riesgo necesita para proteger la vida de sus enfermos, de su personal hospitalario, de quienes hacen las entregas a domicilio y quienes atienden las cajas de los supermercados. Igualmente, todos saben cuál es el costo para el planeta de las deforestaciones, las deslocalizaciones, la acumulación de residuos y la movilidad permanente (cada año, París recibe 38 millones de turistas, es decir, más de diecisiete veces su población, y se enorgullece de ello).

El proteccionismo, la ecología, la justicia social y la salud son solidarios entre sí. Se trata de elementos clave para una coalición política anticapitalista lo bastante fuerte como para exigir, ya mismo, un programa de ruptura. ♦

1. Véase Serge Halimi, “Le naufrage des dogmes libéraux” y Frédéric Lordon, “Cuando Wall Street se hizo socialista”, respectivamente, *Le Monde diplomatique*, octubre de 1998, y *Le Monde diplomatique*, edición chilena, octubre de 2008.
2. Véase Julien Brygo, “¿Se puede vivir aún sin internet?”, *Le Monde diplomatique* en español, agosto de 2019, <https://mondiplo.com/se-puede-vivir-aun-sin-internet>.
3. Véase Samuel Kahn, “Les Polonais en quarantaine doivent se prendre en selfie pour prouver qu'ils sont chez eux”, *Le Figaro*, 24 de marzo de 2020.
4. Craig Timberg, Drew Harwell, Laura Reiley y Abha Bhattarai, “The new coronavirus economy: A gigantic experiment reshaping how we work and live”, *The Washington Post*, 22 de marzo de 2020.

S.H.

El capitalismo del desastre

Hasta el próximo fin del mundo...

por Renaud Lambert y Pierre Rimbart*

El arte de la prestidigitación consiste en orientar la atención del público para que no observe lo que tiene ante sus ojos. En el corazón de la epidemia de Covid-19, el juego de manos adoptó la forma de un gráfico con dos curvas, difundido por los televisores de todo el mundo. Como abscisa el tiempo; como ordenada la cantidad de casos severos de la enfermedad. Una primera curva en forma de puntas agudas presenta el impacto de la epidemia si no se hace nada: rompe la recta horizontal que indica las capacidades máximas de acogida de los hospitales. La segunda curva ilustra una situación donde las medidas de confinamiento permiten limitar la propagación. Débilmente abombada, como el caparazón de una tortuga, se desliza bajo el umbral fatídico.

Exhibido de Washington a París, pasando por Seúl, Roma o Dublín, el gráfico apunta a la urgencia: extender en el tiempo el ritmo del contagio para evitar la saturación de los servicios de salud. Cuando llaman la atención sobre las dos ondulaciones, los periodistas eluden un elemento importante: esa recta discreta, en el medio del gráfico, que representa la cantidad de camas disponibles para atender los casos graves. Presentado como un dato caído del cielo, ese “umbral crítico” se desprende de elecciones políticas.

*RESPECTIVAMENTE, REDACTOR EN JEFE ADJUNTO Y REDACTOR DE LE MONDE DIPLOMATIQUE, PARÍS.
ARTÍCULO PUBLICADO EN LA EDICIÓN CHILENA DE LE MONDE DIPLOMATIQUE ABRIL DE 2020.
TRADUCCIÓN: VÍCTOR GOLDSTEIN

Si hay que “achatar la curva” es porque, desde hace decenas de años, las políticas de austeridad redujeron la marca al despojar a los servicios de salud de sus capacidades de recepción. En 1980 Francia disponía de once camas de hospital (todos los servicios mezclados) cada mil habitantes. Hoy no hay más que seis, que en septiembre una ministra de Salud macronista proponía dejar libradas a la buena voluntad de los “*bed managers*” (administradores de camas), encargados de asignar ese recurso escaso. En Estados Unidos, las 7,9 camas por mil habitantes inventariadas en 1970 se reducen a 2,8 en 2016. Según la Organización Mundial de la Salud, Italia contaba con 922 camas dedicadas a los “casos serios” por 100.000 habitantes en 1980, contra 275 treinta años más tarde. En todas partes la misma consigna: reducir los costos. El hospital funcionará como una fábrica automotriz, en modo “justo a tiempo”. Resultado, el 6 de marzo pasado la Sociedad italiana de Anestesia Analgésica, Reanimación y Terapia Intensiva (SIAARTI) comparaba el trabajo de los médicos de urgencia transalpinos con “medicina de catástrofe”. Y alertaba: teniendo en cuenta “la falta de recursos”, “podría ser necesario establecer una edad límite para el acceso a la unidad de terapia intensiva”. “Medicina de guerra”: un término ahora corriente en el Gran Este de Francia.

Burocracia liberal

Así, la crisis del coronavirus depende tanto de la peligrosidad de la enfermedad como de la degradación organizada del sistema sanitario. Eternas cámaras de resonancia del credo contable, los grandes medios eludieron el examen crítico de esas elecciones para invitar a lectores y auditores a un vertiginoso debate filosófico: ¿cómo decidir a quién salvar y a quién dejar morir? Esta vez, sin embargo, será difícil ocultar la cuestión política detrás de un dilema ético. Porque la epidemia de Covid-19 descubre a los ojos de todos una organización económica todavía más aberrante de lo que nadie suponía. Mientras que algunas compañías aéreas hacían circular a sus aviones vacíos con el objeto de conservar sus franjas horarias, un investigador explicaba cómo la burocracia liberal había desalentado la investi-

gación fundamental sobre los coronavirus. Como si fuera necesario salir de lo corriente para percibir su desarreglo, Marshall Burke, docente en Ciencia de los Ecosistemas en la Universidad de Stanford, observaba esta paradoja “La reducción de la contaminación del aire debida a la epidemia de Covid-19 en China probablemente salvó veinte veces el número de vidas perdidas debido a la enfermedad. No se trata tanto de inferir de esto que las pandemias son benéficas como de medir hasta qué punto nuestros sistemas económicos son malos para la salud. Incluso en ausencia de coronavirus”. El broche de oro de este viaje a Absurdilandia no se encontraba ni en el riesgo de escasez de medicamentos consecutivo a la deslocalización de las cadenas de producción, ni en la obstinación de los mercados financieros en penalizar a Italia cuando el gobierno tomaba sus primeras medidas sanitarias, sino puertas adentro de los hospitales. Instituida a mediados de los años 2000, la “tarifa por la actividad” (T2A) proporciona el financiamiento de los establecimientos por el número de los actos médicos realizados, facturados cada uno como en una tienda, más que en función de una planificación de las necesidades. De haber sido aplicado durante la crisis en curso, este principio del cuidado como mercancía importado de Estados Unidos pronto habría estrangulado a los establecimientos que recibían a los pacientes más afectados porque las formas críticas del Covid-19 exigen en primer lugar el establecimiento de una ventilación mecánica, acto costoso en tiempo pero menos remunerativo en la estructura de precios que cantidad de exámenes diferidos a causa de la epidemia...

La hora de la cuarentena

Un tiempo, el microbio que está en el origen de las más severas medidas de confinamiento nunca imaginadas en tiempos de paz pareció romper los marcos del espacio social: el banquero de Wall Street y el trabajador chino ¿no se veían repentinamente sometidos a la misma amenaza? Y luego el dinero recuperó sus derechos. Por una parte los confinados en los chalets que teletrabajan con los pies en la piscina; por la otra los invisibles de todos los días, personal sanitario, agentes de superficie, cajeras de supermercado

y asalariados de la logística que por una vez salieron de la sombra por estar sometidos a un riesgo que los más favorecidos desdeñan. Teletrabajadores enclaustrados en un apartamento exiguo donde resuenan los llantos de los niños; gente sin techo a quienes les gustaría poder quedarse en su casa.

En su “tipología de los comportamientos colectivos en tiempos de peste”, entre los siglos XIV y XVIII, el historiador conservador Jean Delumeau observa esta invariante: “Cuando aparece el peligro del contagio primero se trata de no verlo”. El escritor alemán Heinrich Heine observa que después del anuncio oficial de la epidemia de cólera en París, en 1832, “los parisinos se paseaban con tanta más jovialidad en los bulevares” cuanto que “había sol y un tiempo espléndido”. Luego, los ricos huyen al campo. Más tarde, el gobierno pone a la ciudad en cuarentena. Entonces, de pronto, explica Delumeau, “los marcos familiares son abolidos. La inseguridad no nace solamente de la presencia de la enfermedad sino también de una desestructuración de los elementos que construían el medio ambiente cotidiano. Todo es distinto”. Los habitantes confinados de Wuhan, Roma, Madrid o París lo experimentan en una escala inédita.

Las grandes pestes de la Edad Media y del Renacimiento se interpretaban a menudo como un signo del Juicio Final, el de la furia de un Dios vengador desencadenada en un mundo que llega a su fin. Entonces cada uno se volvía alternativamente hacia el cielo para implorar la gracia y hacia la vecindad en busca de culpables: los judíos y las mujeres a quienes buscan como chivos expiatorios en *Los animales con peste*, de La Fontaine. En la Europa del siglo XXI, la epidemia de coronavirus se desploma sobre sociedades secularizadas pero, desde la crisis financiera de 2008, afectadas en grados diversos por el sentimiento de una “pérdida de control” ecológico, político, financiero, demográfico, migratorio, etcétera.

Desdeñar lo imprevisto

En esta atmósfera de “fin del mundo” donde se mezclan imágenes de Notre-Dame de París en llamas y debates sobre el derrumbe venidero, las miradas se vuelven hacia

el poder público: el Estado, fuente de agravación del problema por su obstinación en quebrar el sistema de salud y única instancia no obstante susceptible de ordenar y coordinar una respuesta a la epidemia. Pero, ¿hasta dónde ir? En el curso del mes de febrero, el confinamiento durante varias semanas de 56 millones de habitantes de Hubei en China, la detención forzada de las fábricas, la llamada al orden de ciudadanos por drones equipados de cámaras y megáfonos, provocan en Europa comentarios socarrones o circunspectos sobre la mano de hierro del Partido Comunista. “Ninguna lección puede ser sacada de la experiencia china sobre la duración potencial de la epidemia –explica la revista *L’Express*, el 5 de marzo–. Allá disminuyó gracias a medidas drásticas de confinamiento, probablemente inaplicables en nuestras democracias”. Cansados, frente a virus insensibles a la superioridad de “nuestros” valores, hay que resolverse a poner en primer plano la decisión centralizada y el liberalismo económico en segundo.

Director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus aclara que “es posible rechazar la epidemia, pero únicamente sobre la base de un abordaje colectivo, coordinado y amplio, que implica al conjunto de la maquinaria”. Colectivo, coordinación, Estado: el revés del mercado. En algunos días, los marcos interpretativos del mundo social se vuelven como un guante: “Todo es distinto”. Las nociones de soberanía, de frontera, de límite e incluso de gastos públicos, asociadas desde hace medio siglo en los discursos públicos al “nacional-populismo” o a Corea del Norte, adquieren de pronto figura de solución en un mundo hasta entonces regulado por el culto a los flujos y al rigor presupuestario.

Aguijoneada por el pánico, la vanguardia editocrática descubre repentinamente lo que se había propuesto ignorar. “¿No se puede decir también que en el fondo esta crisis nos invita a repensar partes enteras de la globalización: nuestra dependencia de China, del librecomercio, del avión?”, interroga en *France Inter*, el 9 de marzo, Nicolas Demorand, en cuyo micrófono los detractores del proteccionismo, como Daniel Cohen, se suceden desde hace años.

Es preciso que la razón mercantil haya reconfigurado profundamente los entendimientos para que solo la irrupción de una pandemia mortal haga audible al poder las pe-rogrulladas enunciadas por el cuerpo médico desde hace décadas: “Sí, hay que disponer de una estructura hospitalaria pública que se haga cargo de tener camas disponibles de manera permanente –resumieron los médicos André Grimaldi, Anne Gervais Hasenknopf y Olivier Milleron–. El nuevo coronavirus tiene el mérito de recordar evidencias: no se paga a los bomberos simplemente para que vayan a apagar el fuego, lo que se quiere es que estén presentes y dispuestos en su cuartel, incluso cuando no hacen más que sacarle brillo a su camión mientras esperan que suene la sirena”.

Prever lo que ocurre sin dar aviso (un incendio, una enfermedad, un cataclismo, una crisis financiera): fue incorporando a sus instituciones –a menudo en contra de su voluntad– esa exigencia popular como el capitalismo se perpetuó y se renovó entre la crisis de 1929 y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Planificar lo imprevisto exigía romper con la racionalidad del mercado, que fija un precio en función de la oferta y la demanda, desprecia lo improbable y modela el porvenir por medio de ecuaciones donde las sociedades no cuentan para nada. Esa ceguera de la economía estándar, llevada a su más alto grado en las salas de negocios, golpeó al ex-agente y estadístico Nassim Nicholas Taleb. En un libro que apareció unos meses antes de la crisis de 2008, él observaba a propósito de los futurólogos de corto plazo: “El problema con los expertos es que no tienen la menor idea de lo que ignoran”. Desdeñar lo imprevisto en un mundo marcado por la multiplicación de acontecimientos inesperados, los “cisnes negros”, a su juicio tiene que ver con la insensatez. A fines de marzo de 2020, cualquiera que oía resonar en su ventana el silencio de la ciudad confinada podía meditar sobre el encarnizamiento del Estado en despojarse a sí mismo no solo de las camas de reanimación sino de sus instrumentos de planificación, ahora monopolizados por algunas multinacionales del seguro y el reaseguro.

Repensar otro modelo

El quiebre provocado por la pandemia ¿puede invertir ese curso? Reencastar lo eventual y lo fortuito en la conducción de los asuntos públicos, ver más lejos que el cálculo costo/beneficio, poner en marcha una planificación ecológica implicaría socializar la mayoría de los servicios indispensables para la vida de las sociedades modernas, de la limpieza a las redes digitales, pasando por la salud: un vuelco de tal magnitud como raramente ocurre en tiempos normales. Una mirada de historiador sugiere que los cambios de régimen, de trayectoria, de manera de pensar la vida colectiva y la igualdad permanecen fuera de alcance de las deliberaciones políticas corrientes. “En todos los tiempos –escribe el historiador austríaco Walter Scheidel, profesor en Stanford–, los más grandes replanteos resultaron de los impactos más severos. Así, cuatro tipos de rupturas violentas lograron aplanar las desigualdades: la guerra cuando implica una movilización masiva, las revoluciones, las quiebras estatales y las pandemias mortíferas”. ¿Estaríamos en una de ellas? Por otro lado, en el curso de su historia el sistema económico mostró una extraordinaria capacidad de absorber los impactos cada vez más frecuentes que engendra su irracionalidad. De tal modo que las sacudidas más brutales generalmente son provechosas para los garantes del statu quo que se apoyan en la estupefacción para extender el control del mercado. Ese capitalismo del desastre desmenuzado poco antes de la gran depresión de 2008 por Naomi Klein se burla del agotamiento de los recursos naturales y de las instituciones de protección social susceptibles de amortiguar las crisis. En un arrebató de optimismo, el ensayista canadiense observaba: “No siempre reaccionamos a los golpes volviendo atrás. En el marco de una crisis, a veces crecemos, rápido”.

Una idea loca

Fue una impresión de este tipo la que quiso dar el presidente francés Emmanuel Macron al expresar el 12 de marzo de 2020 su voluntad de “interrogar el modelo de desarrollo en el cual se internó nuestro mundo desde hace décadas y que devela sus fallas a la luz del día, interrogar las debilidades de nuestras democracias. Lo que revela ya esta pandemia

es que la salud gratuita sin condiciones de ingresos, de trayectorias o de profesión, nuestro Estado de Bienestar, no son costos o cargas sino bienes preciosos, ventajas indispensables cuando golpea el destino. Lo que revela esta pandemia es que hay bienes y servicios que deben ser puestos fuera de las leyes del mercado. Delegar nuestra alimentación, nuestra protección, nuestra capacidad de cuidar nuestro marco de vida a otros es en el fondo una locura. Debemos recuperar el control". Tres días más tarde aplazaba una reforma de las jubilaciones, otra de las asignaciones por desocupación, para luego decretar la puesta en marcha de medidas consideradas hasta ahora imposibles: limitación de los despidos, abandono de toda coerción presupuestaria. Las circunstancias acentuaron por sí mismas esta degradación: con el derrumbe de los valores bursátiles, la obsesión presidencial de orientar el ahorro y las jubilaciones de los puestos jerárquicos hacia los mercados de acciones se presenta como una genialidad visionaria. Sin embargo, suspender el código del trabajo, restringir las libertades públicas, financiar a las empresas con total disponibilidad, sustraerlas a las cotizaciones sociales sobre las cuales descansa el sistema de salud no señala una ruptura radical con las políticas precedentes. Esta transferencia masiva de dinero público hacia el sector privado recuerda el salvataje de los bancos por el Estado en 2008. La cuenta había adoptado la forma de la austeridad impuesta a los asalariados y a los servicios públicos. ¿Menos camas? Claro: había que rescatar a los bancos.

Por eso la epifanía del jefe de Estado evoca la que golpeó a Nicolas Sarkozy un día de septiembre de 2008, poco después del derrumbe de Lehman Brothers. Ante sus partidarios petrificados, el presidente de la República había anunciado solemnemente: "Con el fin de un capitalismo financiero que había impuesto su lógica a toda la economía y había contribuido en pervertirla culmina cierta idea de la globalización. [...] La idea de que los mercados siempre tienen razón era una idea loca". Cosa que, una vez pasada la tormenta, no le impidió retomar el curso de la locura común y corriente. ◆

R.L. y P.R.

Pandemia y desigualdad de género

Mujeres en alto riesgo

por Clara González*

La crisis sanitaria, económica y social generada por el Coronavirus está impactando con mayor dureza sobre niñas y mujeres. La feminización de los empleos del área de la salud, el precarizado trabajo de cuidados y el agravamiento de la violencia de género son algunos de los ejes que vertebran una desigualdad que hoy se agudiza.

Era 8 de marzo, el calor de Santiago no daba tregua y nuestros cuerpos pintados gritaban lo que durante siglos hemos callado. Nuevamente volvíamos a hacer historia. Millones de mujeres nos manifestábamos a lo largo y ancho del planeta levantando consignas en contra de la violencia y de la precarización de nuestras vidas. Las mujeres chilenas se tomaban la Alameda y también algunas portadas de diarios extranjeros, poco después de haber liderado un movimiento mundial que apuntaba directamente al patriarcado institucional instalado sentenciando “el violador eres tú”.

Aunque aquellas jornadas se prestaron para que algunas voces oportunistas condenaran al movimiento feminista como culpable de la expansión de la epidemia, hoy más que nunca se puede afirmar la validez de nuestras consignas y la necesidad de que sigamos alzando la voz.

*ABOGADA Y PERIODISTA. ARTÍCULO PUBLICADO EN LA EDICIÓN CHILENA DE LE MONDE DIPLOMATIQUE MAYO 2020.

Y es que, cinco meses después del inicio de la pandemia, se han ido desnudando y cuestionando los postulados del sistema neoliberal y patriarcal al que se someten nuestras vidas y nuestros cuerpos.

La crisis del coronavirus está transparentando la manera en que nos organizamos como sociedad a la vez que agrava las tensiones preexistentes: dentro de este modelo que se sustenta sobre la base de la desigualdad, las mujeres trabajadoras somos las que salimos peor paradas en la epidemia del Covid-19. Y ello ocurre no tanto por la vía del contagio del virus en sí mismo, sino por la propia agudización de la precarización y de la violencia de género estructural que históricamente enfrentamos.

Empleos feminizados y precarios

En primer lugar debemos considerar que la alta feminización de los empleos relacionados con la crisis sanitaria hace que las mujeres sean más proclives a sufrir las consecuencias de la epidemia. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, las mujeres representan el 67% del total de los trabajadores de la salud en el mundo, trabajo por el que, por cierto, cobran en promedio un 28% menos que los hombres, aunque aportan anualmente a la economía mundial 3 mil millones de dólares, la mitad de ello en forma de trabajo no remunerado.

En un continente en el que casi el 90% de las labores de enfermería es realizado por mujeres, se puede afirmar que son ellas quienes están combatiendo en la primera línea contra el coronavirus. Son las enfermeras y auxiliares las que, al estar más tiempo con los pacientes, desarrollando labores de cuidados, recogiendo muestras o análisis de sangre, se exponen en mayor medida que los propios médicos. Farmacéuticas, paramédicas, auxiliares, gerontólogas y cuidadoras de adultos mayores son también parte de este frente de batalla contra el virus.

Pero además, la exposición al contagio no se produce solamente a través del trabajo formal, sino que, tal y como señalaba la OMS en un informe sobre epidemias y enfermedades infecciosas, los mismos roles de género, al determinar los espacios que mayoritariamente ocupan las

mujeres, como quedarse en la casa desarrollando tareas de cuidados, aumentan en intensidad y frecuencia la exposición a ciertos agentes infecciosos.

Quizás, en medio de toda esta crisis, debemos preguntarnos sobre la importancia de revertir estas dinámicas a las que el mercado laboral somete a las trabajadoras de la salud: ¿Por qué las mujeres deben exponer su salud y sus vidas en mayor medida? ¿por qué permitimos que siga existiendo esa gran brecha profesional y salarial? ¿cómo es posible que su trabajo haya sido invisibilizado durante tanto tiempo?

Junto a la mayor exposición por parte de las mujeres que se desempeñan directamente en empleos con mayor incidencia sobre la crisis sanitaria, las mujeres en su conjunto se enfrentan a la carga del trabajo de cuidados, una labor que la mayoría de las veces no es retribuido y que, en condiciones de no remuneración, es en un 76% realizado por mujeres y niñas según la Organización Mundial del Trabajo.

El trabajo de cuidados, que comprende todas aquellas tareas necesarias para la reproducción de la vida, como cocinar, limpiar, administrar el hogar, cuidar de niños y de personas dependientes, y que, según datos de la organización Oxfam Intermón, supondría 10,8 billones de dólares si fuese contabilizado (“tres veces el tamaño de la industria de la tecnología”), se intensifica exponencialmente a raíz de la pandemia. Con el cierre de escuelas y guarderías y la saturación de los centros sanitarios, las mujeres se ven forzadas asumir dichas tareas y todo indica que, mientras dure el confinamiento en los hogares, millones de mujeres trabajarán en la economía del cuidado de forma no remunerada a la vez que se desempeñan en sus trabajos formales por la vía del teletrabajo. En este escenario de crisis sanitaria, los hogares vuelven a ser centros de producción y consumo.

Más violencia en cuarentena

Desde que se iniciaron las políticas de confinamiento en los hogares para reducir la propagación del virus, se prendieron las alarmas feministas que alertaban del previsible aumento de la violencia física y sexual contra las mujeres y niñas que conviven con sus agresores.

Recientemente, Maria-Noel Vaeza, directora regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, mostraba su preocupación por el aumento de la violencia en la región, tal y como venía ocurriendo en China, Corea, Italia o Francia, llamando a tomar medidas: “Esto nos debe llevar a invertir más en prevención y en sistemas de alerta temprana a través de las organizaciones de mujeres de base, utilizando la policía. Este es un tema de salud pública que puede llevar a un número mayor de feminicidios y de violencia contra la mujer”, alertaba la representante de Naciones Unidas.

Los vaticinios no tardaron en cumplirse y, tan solo en el mes de marzo, en Chile se dispararon en un 250% los delitos de femicidio frustrado según constató el Ministerio Público. A su vez, se incrementaron en un 70% las llamadas al fono de orientación y ayuda para las mujeres que viven violencia, según constató el Ministerio de la Mujer.

En un país donde en la última década murieron 412 mujeres víctimas de femicidio, la falta de políticas públicas comprometidas con la erradicación de la violencia de género resulta al extremo irresponsable en el marco de esta epidemia. En momentos en que el distanciamiento social y el confinamiento en los hogares debilita las redes sociales y comunitarias, y paralelamente se ralentiza el acceso a la justicia y a la protección policial, se torna imprescindible una política que apoye y proteja de manera efectiva a las mujeres y niñas.

Lamentablemente, el actual gobierno no ha dado ningún indicio de estar tomando medidas orientadas a mitigar los efectos de esta crisis social, económica y sanitaria que repercutirán en mayor medida sobre las mujeres trabajadoras. Muy por el contrario, y replegándose en su senda de políticas neoliberales, el gobierno de Sebastián Piñera sigue priorizando las ganancias de una elite sobre la vida de las personas. Sin un sistema de protección social decente, miles de trabajadores se ven obligados cada día a acudir a sus puestos de trabajo, arriesgando su salud y su vida, y a la vez las de sus familias y comunidades. Mientras en algunos países se implementan medidas que tratan de resguardar las vidas humanas, en otros se protege y se cuida el sistema de acumulación capitalista.

Ahora que estamos viendo cómo todo lo que era sólido se desvanece en el aire, solo tenemos la certeza de que, después de esta crisis, el mundo será otro. Mientras la totalidad del modelo económico y social es cuestionado, urge también preguntarse por el rol de las mujeres que lo sostienen. ¿Cómo revertir la situación de violencia y precarización a la que cotidianamente nos vemos sometidas? ¿Cómo compartimos de forma justa y equitativa el trabajo de cuidados? ¿Dónde situamos la reproducción de la vida? ¿Qué alternativas al modelo imperante somos capaces de plantear?

Frente al sistema de un mercado depredador, la coyuntura está demostrando la centralidad del cuidado y del hogar para proteger la vida, a la vez que exige repensar políticas públicas que comporten un cambio de paradigma. Ahora más que nunca, las mujeres seguiremos tejiendo comunidad y organizándonos para construir un mundo en el que la vida humana valga más que el dinero. ◆

C.G.

Impactos de la crisis sanitaria

Chile: La verdadera vida de las trabajadoras de casa

por Luz Vidal Huiriqueo*

Chile, a partir del 18 de octubre de 2019, cambió y se puso en relevancia la enorme desigualdad que se desarrolló por más de treinta años. Quedó de relieve la desigualdad en educación, salud, vivienda, transporte, justicia, entre tantos otros problemas, y sobre todo que el desarrollo económico que Chile tanto ostentaba a nivel latinoamericano no llegaba a todos. Lo que es peor, solo era para un pequeño grupo de la sociedad.

Desde nuestro Sindicato de trabajadoras de casa particular la situación no complicaba demasiado; las compañeras tenían su trabajo y eso parecía no tocarlas, ellas solo se dedicaban a trabajar, largas jornadas en la modalidad puertas adentro (las trabajadoras viven en las casas de las personas a las que prestan servicio, en su gran mayoría de lunes a viernes). Mientras otras, con una movilización pública saturada en las cuales pasan casi dos horas de ida y otras dos de vuelta, las que desarrollan sus actividades puertas afuera.

Y eran tal vez esos mismos motivos los que no le dejaban tiempo para analizar en profundidad lo que en Chile estaba ocurriendo. Así pasó octubre, noviembre y diciem-

*PRESIDENTA DEL SINDICATO DE TRABAJADORAS DE CASA PARTICULAR, REGIÓN METROPOLITANA.
ARTÍCULO PUBLICADO EN LA EDICIÓN CHILENA DE LE MONDE DIPLOMATIQUE MAYO 2020.

bre. En enero ya en periodo estival hubo incluso menor preocupación por lo que ocurría a nivel país, y es acá donde se empieza a conocer la situación que se comienza a dar al otro lado del mundo, el coronavirus. Pero era China, literalmente al otro lado del mundo, por lo tanto, no parecía que fuese a afectar mayormente.

A fines de enero ya se sabía que este virus era altamente contagioso, pero a nivel del gremio, tal vez aún se seguía viendo lejos. En lo personal, mis empleadores me ayudaron a dimensionar la gravedad de lo que se venía, al cancelar ellos sus vacaciones que tenían programadas por el sudeste asiático durante febrero, y cambiando todos sus panoramas en un plazo de cuatro días. Esto activó mis alarmas y comencé a informarme más fuertemente sobre qué era esto que se estaba dando.

Conversando con dirigentes del sindicato, quienes trabajan con médicos que se desarrollan profesionalmente en clínicas de los sectores más pudientes de la capital de Chile, comenzamos a activar ya las alarmas, pero como sindicato teníamos en ese momento otras preocupaciones que mantenían nuestra atención plena, por eso se pasó gran parte de febrero viéndolo como de fuera pero ya con una angustiante espera de cuándo se produciría el primer caso acá; esto hasta el 25 de febrero, fecha en la que se registró el primer caso de coronavirus o Covid 19 en Chile.

Como organización comenzamos a ver la importancia de mantenernos informadas, ya que muchos de nuestros empleadores y a quienes prestamos servicios tienen la posibilidad de salir de vacaciones a todos esos lugares en los cuales se estaba dando la propagación de este virus, por lo que no sabíamos muy bien cómo enfrentar esa situación. Ante estas dudas nos comunicamos en una primera instancia con la autoridad del trabajo para ver y revisar la situación legal a la que debían enfrentarse las compañeras; sin embargo, la respuesta se demoró en llegar casi tres semanas de enviadas las consultas, cuando la situación en Chile ya estaba absolutamente desatada en lo que se refería a la salud y a lo laboral.

Como sindicato comenzamos a recibir la primera semana algunos llamados, los primeros eran relatos de trabaja-

doras con susto eran de compañeras de trabajo puertas afuera, a quienes sus empleadores le solicitaban cambiar la modalidad de trabajo y pasar a prestar servicio ahora puertas adentro, no tomando en consideración que esas mujeres son en su mayoría trabajadoras jefas de hogar. Al encontrarse sin formalización de su trabajo temían perder su fuente laboral si no accedían a lo que sus empleadores le pedían para resguardar su propia seguridad.

Las trabajadoras puertas afuera han sido las más perjudicadas en este ámbito, también las trabajadoras migrantes tanto en el plano de la salud (por exponerse a diario para llegar a su trabajo) como en lo laboral, por la desvinculación, dejándolas sin ingresos.

Esto no solo es una pandemia de salud pública, sino también una pandemia en lo económico y laboral, y es ahora cuando se comienza a visualizar la verdadera cara de Chile respecto a los derechos de las trabajadoras de casa, con una ley, la 20.786, dictada en el 2015 pero que en la práctica jamás se llegó a la fiscalización e implementación plena de dicha normativa.

Así es como nos enfrentamos a la presencia de esta pandemia con un número -según la máxima autoridad de derecho laboral- de 180.000 trabajadoras del gremio que no presentaban ningún tipo de formalización del trabajo que desarrollan. Eso demuestra que durante cinco años la autoridad hizo muy poco o nada por velar el cumplimiento de la ley, dejando a este gran número de trabajadoras ante la disyuntiva de elegir si cuidan su salud o generan ingresos para sus familias. Ellas se ven enfrentadas a escoger si mueren a causa de contraer el coronavirus o mueren de hambre. Esto porque los bajos ingresos tampoco les permiten tener capacidad de ahorro, por lo que no pueden parar de trabajar para cuidarse y proteger a su familia, menos aun cuando son jefas de hogar.

La pandemia del Covid 19 deja en evidencia la vulnerabilidad de quienes desarrollamos el trabajo de casa particular, porque las autoridades aún no se quieren hacer cargo de la fiscalización, igualación y creación de derechos que puedan tener o faltar para este grupo de trabajadoras:

- La ley 19.728 (2001) sobre seguro de cesantía dejó

fuera de su cobertura a las trabajadoras de casa particular. Este seguro opera a través de una cuenta individual donde se acumulan los aportes de las cotizaciones mensuales más un fondo de cesantía solidario, que es un fondo de reparto con aportes del empleador y del Estado, y se utiliza para complementar el beneficio cuando la cuenta individual es insuficiente.

- Las trabajadoras están afectas a la ley 19.010 (1991) que establece una cuenta de indemnización del 4.11% de la remuneración imponible con cargo al empleador; esta es una cuenta de ahorro de indemnización, cuyos fondos le pertenecen a la trabajadora.

- La ley 21.227 recientemente dictada permite que las trabajadoras puedan hacer uso de los fondos de su cuenta de indemnización; con la modificación se pretende asimilar a lo que sería un seguro de cesantía, pero con la diferencia que acá el Estado no realiza aporte, por lo que una vez más se discrimina a las trabajadoras del gremio.

En lo que respecta al convenio 189 que Chile ratificó el 15 de junio de 2015, también el Estado se encuentra en incumplimiento, ya que con su ratificación se compromete a adoptar diversos tipos de medidas legislativas y de políticas públicas para lograr la implementación y disposiciones de este convenio. Entre las obligaciones que establece el Convenio 189 están:

- Artículo 3, “todo miembro deberá adoptar, en lo que respecta a los trabajadores domésticos, las medidas previstas en el presente convenio para respetar, promover y hacer realidad los principios y derechos fundamentales en el trabajo, a saber ... (d) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación”.

- En su artículo 14, párrafo 1, “todo miembro, teniendo debidamente en cuenta las características específicas del trabajo doméstico y actuando en conformidad con la legislación nacional, deberá adoptar medidas apropiadas a fin de asegurar que los trabajadores domésticos disfruten de condiciones no menos favorables que las condiciones aplicables a los trabajadores en general con respecto a la protección de la seguridad social”.

Como sindicato hemos visualizado y llamado a las autoridades a consecuencia de esta pandemia a realizar un trabajo en lo inmediato y también a largo plazo, que serían:

- La incorporación inmediata de las trabajadoras de casa particular al fondo solidario de cesantía, esta medida permitirá que las mujeres trabajadoras formalizadas del sector puedan acceder en igualdad y solidaridad a las medidas implementadas por el gobierno.

- La implementación de una renta básica de emergencia digna y que permita a las mujeres trabajadoras no formalizadas del sector poder mantener a sus familias durante el periodo de la emergencia.

- Fondos especiales y frescos que permitan una verdadera fiscalización de parte de la Inspección de Trabajo sobre el cumplimiento de la ley n° 20.786 que obliga a los/as empleadores a escriturar e inscribir el contrato de trabajo.

- La modificación de la legislación interna, comprometida por el Estado chileno al ratificar el Convenio 189 de la OIT, con el fin de terminar con todo estatus especial para las trabajadoras de casa particular y la igualación a los derechos laborales de todos/as los/as trabajadores del país.

Como podemos observar el estallido social no era que no afectara o mostrara la desigualdad de Chile con este gremio. Era que las trabajadoras no tenían tiempo de parar y observar dichas desigualdades. Hoy la pandemia Covid 19 las obligó a parar y le mostró la dura realidad que estaban viviendo y que si no nos movilizamos y nos unimos no habrá cambio posible porque seguiremos siendo invisibilizadas y abusadas por los empleadores pero también por el Estado y sus distintos organismos. En aspectos sociales el Estado debe hacerse cargo y no se puede seguir permitiendo que sea el mercado el que regule. ◆

L.V.H.

Retorno a la época colonial

Por Verónica Salas Brantti*

Para entender es necesario volver atrás en el tiempo y revivir situaciones que nos hicieron creer que habíamos logrado implementar ante la sociedad chilena esta labor realizada por miles de mujeres, que sería valorada socialmente y respetada legalmente una vez conseguida la puesta en marcha de la ley 20.786 y la ratificación por el Estado de Chile del Convenio 189 de la OIT sobre trabajo doméstico.

Pero todo esto se convertía en un sueño y muchas de nuestras compañeras comenzaron a vivir una pesadilla cuando se da la orden de cuarentena para las comunas más osentas. Las trabajadoras de casa particular puertas afuera quedan en una incertidumbre total, muchas de ellas son presionadas a cambiar su modalidad a puertas adentro o al término de relación laboral en forma unilateral.

Por otra parte, las que laboran puertas adentro son prácticamente obligadas a realizar cuarentena en conjunto con las familias y trabajar sin descanso de lunes a lunes volviendo de la noche a la mañana a la época colonial.

Que poco duró el sueño de sentirnos con derechos, no estábamos en las listas de trabajadoras necesarias, no estábamos resguardadas con la ley de cesantía, no existían los contratos, volvíamos a ser trabajadoras precarias con derechos muy mínimos.

Quienes lo realizan son mujeres madres de familia sostenedoras de hogares, mujeres migrantes que han dejado a los suyos por mejores oportunidades. Y comenzó a sonar el teléfono llamada tras llamada buscando alguna asesoría a su problema, qué hacer me pidieron la pieza, no puedo entrar al lugar donde trabajo, no tengo contrato, trabajo tres días a la semana, me quedo en el aire, me despidieron, no puedo salir el fin de semana hasta que termine la cuarentena.

Este encierro aumenta la sensación de menoscabo, ansiedad, falta de libertad, aislamiento e incertidumbre. Pero esta pandemia nos ha demostrado cuánto nos falta para sentirnos realmente trabajadoras con derechos iguales al resto de los trabajadores con reconocimiento y el respeto que merecemos. Necesitamos eliminar la precariedad y sentir que esta labor es parte del motor que mueve la economía del país.

*Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular

Endeudamiento y hogares ¿Quién paga la pandemia?

por Andrea Sato Jabre*

A medida que observamos que las ciudades en cuarentena y los cuerpos contagiados aumentan en el mundo, de forma paralela presenciamos el desplome de las bolsas globales. Las economías mundiales entran en un periodo de recesión sin precedentes, lo cual nos muestra una incómoda verdad: Las trabajadoras/es son quienes crean la riqueza y no los empresarios. El engranaje principal para que funcione la maquina capitalista es la fuerza de trabajo y las finanzas globales dependen de ella.

A pesar de la centralidad que cobran las trabajadoras y trabajadores para la creación de valor a escala mundial, van a ser los hogares que viven del trabajo quienes se verán más perjudicados en el escenario de crisis económica. Son los hogares proletarios los que se van a enfrentar a los recortes estatales, a la falta de ingreso y al endeudamiento. Para los hogares de la clase trabajadora no hay planes económicos de salvataje del Fondo Monetario Internacional ni del Banco Mundial.

Para entender los alcances de la crisis capitalista que estamos vivenciando es importante observar que esta no se inaugura en enero con el primer brote de COVID-19, la crisis es profunda, sistémica y se viene incubando hace

décadas. El modelo de desposesión que ha contagiado a todos los países del mundo es el caldo de cultivo para la pandemia más letal de todas, el sistema de acumulación capitalista.

El empleo precario

En Chile, el conflicto que enfrenta al capital y la vida, se manifiesta claramente al observar el bajo valor del trabajo, la precarización del empleo y los bajos ingresos. En los últimos 117 meses (casi 10 años) se han creado 1.622.082 empleos, del total de empleos creados durante ese periodo, el 65,1% corresponde a empleo precario que responde a trabajadoras/es externos o cuenta propistas (1). Observamos que de forma sistémica hay un ataque al trabajo –remunerado y no remunerado– en pos del beneficio del capital, las formas de extraer valor es precarizar y por tanto obtener ganancia de la explotación. La creación de empleo precario tiene una clara consecuencia: bajos salarios e ingresos insuficientes para los hogares; en Chile el 50 % de las trabajadoras/es gana menos de \$400.000 y prácticamente 7 de cada 10 trabajadoras/es menos de \$550.000 líquidos (2).

Endeudamiento

Este panorama es poco alentador ya que podemos prever que gran parte de las trabajadoras/es está quedando y quedará sin ingresos en este periodo, ya que el 38,9% de la fuerza de trabajo ocupada, casi 3 millones 600 mil personas en este momento no tienen contrato o están bajo la modalidad de honorarios (3). Este grupo de personas es diferente, pero comparten las condiciones de inestabilidad, bajos ingresos y desprotección estructural. La falta de ingresos obliga a las personas a endeudarse para llegar a fin de mes, las deudas se constituyen en ingresos complementarios ante los bajos salarios, este mecanismo de subsistencia no se inaugura con la cuarentena o con el estallido social como ciertos analistas deslizan, el “pedaleo” de la deuda lleva larga data, podemos observar que, para diciembre del 2015, 3.860.193 personas se encontraban con deuda morosa y en diciembre 2019 esta cifra había au-

mentado a 4.733.305. El aumento de la morosidad en los hogares chilenos ha sido exponencial, y estos alarmantes números se vuelven catastróficos cuando se establece que la morosidad promedio para cada persona morosa es de \$1.864.724 (4) ¿Es posible que personas que tienen salarios de \$400.000 pesos logren saldar deudas que sobrepasan más de 4 veces sus ingresos mensuales? Es evidente que no, por lo mismo, el 73% de las personas que están morosas lo están desde el año 2015 y el 20% han estado de forma intermitente en morosidad durante el periodo.

Hoy día, la deuda se configura como una herramienta que busca solucionar los graves problemas de acceso a bienes y servicios que tienen los hogares, los ingresos insuficientes empujan a las personas a suscribir deudas que difícilmente podrán pagar porque los salarios no alcanzan. En contexto de pandemia, los ingresos se reducirán aún más, ya que gran parte de la fuerza de trabajo no podrá realizar las actividades cotidianas para la subsistencia y quien las realice se expondrá al contagio. En este círculo vicioso, sólo unos pocos ganan, quienes acumulan capital a través de la apropiación del plus valor y agentes del capital financiero que especulan con las necesidades de los hogares. ◆

1. Fundación SOL en base a micro-datos Nueva Encuesta Nacional de Empleo, variación registrada entre ENE-MAR 2010 y OCT-DIC 2019

2. Durán, G., & Kremerman, M. (2019). Los Verdaderos Sueldos de Chile. Santiago de Chile: Estudios de la Fundación SOL.

3. Reportaje CIPER ¿Aguanta usted una cuarentena? Radiografía económica del hogar chileno que se enfrenta al Covid-19. <https://ciperchile.cl/2020/03/17/aguanta-usted-una-cuarentena-radiografia-economica-del-hogar-chileno-que-se-enfrenta-al-covid-19/>

4. Informe XXVII Informe de Deuda Morosa Segundo Cuarto Trimestre 2019, Universidad San Sebastián, Equifax y Mapcity.

A.S.J.

Impactos de la pandemia en Chile

Covid 19 en el epicentro de la violación del derecho humano al agua

por Rodrigo Mundaca*

El día 11 de Marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS), señaló que el coronavirus causante de la enfermedad infecciosa COVID 19, era pandemia, es decir que su contagio era a nivel mundial, los contagiados crecen diariamente de forma exponencial, así como también el número de fallecidos, la humanidad se enfrenta a un virus feroz, que natural o artificialmente inducido, se focaliza principalmente en los adultos mayores, y en personas que padecen afecciones médicas como hipertensión arterial, enfermedades cardíacas o diabetes. A propósito del principal grupo de riesgo, como no recordar a Christine Lagarde, ex directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), a quien se le imputa la frase: "Los ancianos son un peligro para la economía, ya que viven demasiado y eso es un riesgo para la economía global, tenemos que hacer algo, y ya" (1).

La situación en Chile se ha agravado de día en día, en contraposición a lo declarado por el ministro de Salud (21/03/20), Jaime Mañalich, quien sostuvo "¿Qué pasa si el virus muta y se pone buena persona?" (sic).

*INGENIERO AGRÓNOMO.

PREMIO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE NUREMBERG.

PREMIO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DANIELLE MITTERRAND. ARTÍCULO PUBLICADO EN LA EDICIÓN CHILENA DE LE MONDE DIPLOMATIQUE ABRIL DE 2020.

En materia de medidas de protección y prevención, el aislamiento social y lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, o usando un desinfectante a base de alcohol es a estas alturas una condición esencial para no aumentar los contagios.

En su acepción más amplia, del agua depende la vida de los vegetales, el funcionamiento de los ecosistemas, el desarrollo de las economías locales, y por cierto la vida, hoy amenazada de forma despiadada, particularmente aquellas comunidades que se encuentran privadas de agua, producto del modelo de privatización y mercantilización de este bien natural, modelo que en Chile se expresa de forma asimétrica y brutal.

Tenemos según diversas fuentes nacionales, 147 comunas con decretos de escasez hídrica, 400 mil viviendas rurales sin acceso a agua potable, aproximadamente 1,5 millones de personas dependiendo de camiones aljibes para satisfacer su demanda de agua para conservar la vida.

A propósito de los camiones aljibes, el decreto número 41 del ministerio de Salud (08/11/2018), estableció un reglamento sobre las condiciones sanitarias para la provisión de agua potable mediante este tipo de camiones.

Negocio lucrativo

Cuando “vender agua potable” se ha transformado en un lucrativo negocio, como ocurre en la provincia de Petorca o en la provincia de San Felipe, ambas provincias pertenecientes a la región de Valparaíso, ¿Quién está fiscalizando este negocio? ¿Quién garantiza que el agua que se suministra en las comunidades azotadas por el despojo, cumple con los estándares de higiene e inocuidad requeridos? ¿Es posible que los aljibes se transformen en vectores con ruedas?

Y podemos seguir con las disquisiciones: ¿Es posible que hombres y mujeres que viven en territorios privados de agua, puedan lavarse las manos frecuentemente y con agua corriendo cuando dependen de los camiones aljibes? ¿Son suficientes 50 litros de agua por persona para higienizarse las manos frecuentemente y además lavar ropa para evitar posibles fuentes de contagio?

Con la pandemia desatada, la privatización de las aguas en Chile es simplemente criminal, no sólo porque viola un derecho humano esencial, si no porque además priva de este elemento a hombres y mujeres fragilizando y exponiendo sus vidas en detrimento o en favor de la industria extractiva.

Y el tema del agua permanece soslayado por el actual gobierno, funcionarios como el ministro de Agricultura, ufanamente sostienen que como la temporada de riego llega a su fin, los camiones aljibes van a contar con una mayor dotación de agua, o cuando se declara al sector agrícola como infraestructura crítica priorizando el agua para las funciones productivas de los fundos.

Gabinete hídrico

El gobierno de Piñera es un furibundo partidario del modelo privado de agua, sabemos que al interior de su gabinete existe un “gabinete hídrico”, como también sabemos que al interior del Congreso existen parlamentarios como los senadores Coloma, García Huidobro, Ossandon y Castro, que siendo dueños de derechos de agua, intervienen en el debate público para con sus votos impedir que el agua sea un bien nacional de uso público. Hoy cuando disponer de agua para salvaguardar la vida es una condición esencial para combatir el COVID 19, los mencionados tienen una responsabilidad inequívoca, la historia los juzgará.

Al concluir, y como sostiene Joel González, músico, docente y activista socio ambiental de la comuna de Limache, también mi amigo, “No olvidemos que la pandemia está instalada hace rato en Chile, la contagian las industrias extractivas, la minería química a cielo abierto, los monocultivos, las termoeléctricas, la quema de combustibles fósiles, los relaves, las refinerías, los que en rigor usurpan y lucran con el agua, las forestales, las salmoneras, la contaminación de los ríos y del océano, la diferencia es que sobre ellos no se aplica cuarentena, toque de queda, ni restricción alguna, no se moviliza ningún ministerio, no aparece en los medios todos los días, no se toman medidas urgentes para mitigar

el daño y evitar que la pandemia siga extendiéndose a otras ciudades”.

Pasará el coronavirus, muchos sobrevivirán resguardados en sus casas, pero otros miles seguirán bajo una pandemia con incierto desenlace, la debacle ambiental silenciada por los Estados, los medios, e ignorada por tantos otros que desde la comodidad de sus hogares, han mantenido total indiferencia y desinterés por detener el virus infeccioso del modelo de despojo, y que en el “lucrativo negocio del agua” tiene su expresión más despiadada. ◆

1. https://elpais.com/economia/2012/04/11/actualidad/1334133453_457282.html

R.M.

Chile luego de la crisis social y la pandemia

Bioética y biopolítica para un Chile postneoliberal

por Álvaro Ramis*

La pregunta clave es por el día después: ¿Qué tipo de sociedad nacerá luego de la pandemia del COVID-19? Es evidente que las consecuencias de largo plazo de este evento catastrófico global serán enormes, y de difícil pronóstico en toda su magnitud. De partida, sólo evidenciamos sus primeros síntomas: por ejemplo, la digitalización acelerada de la economía, la educación, la salud y los servicios. Pero el efecto más profundo es el fin de la globalización liberal, tal como la entendimos desde el 1990 hasta ahora. El regreso del Estado, no sólo como ente regulador, gendarme o protector, sino como actor activo en la esfera económica, financiera y productiva ya es palpable y evidente.

Salvo escasas voces ideologizadas, el empresariado mundial ha cambiado su tradicional discurso *laissez faire* por un llamado desesperado al Leviatán estatal para salir a su rescate y ayuda, aún al precio de un intervencionismo público inédito desde la irrupción de las políticas de Reagan y Thatcher. El Reino Unido, gobernada por los herejeros políticos del thatcherismo, es un ejemplo evidente: se ha decidido que, si las empresas británicas no despiden a sus trabajadores y les mantienen en nómina, el gobierno

*RECTOR DE LA UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO. ARTÍCULO PUBLICADO EN LA EDICIÓN CHILENA DE *LE MONDE DIPLOMATIQUE* ABRIL DE 2020.

les pagará el 80 por ciento de su salario hasta un máximo de 2.500 libras. Varios gobiernos europeos han anunciado nuevos seguros de desempleo, rentas básicas de subsistencia y han asumido el papel de avales de última instancia. Esta cuasi nacionalización de la economía durará el tiempo que dure la crisis. Pasada la tormenta volverán a los aires liberalizadores para reclamar las utilidades y las “libertades” económicas conculcadas. Pero es difícil que este regreso al orden anterior sea tan fácil e inmediato.

Ya desde la crisis financiera de 2008 las bases teóricas del neoliberalismo, como prescripción de un orden espontáneo autorregulado, quedaron dañadas de forma estructural e irremediable. La elección de Trump fue una consecuencia directa de ello, y colocó a los Estados Unidos al frente de un nuevo proyecto neo-mercantilista, donde el Estado asumió una función clave, como promotor y defensor de los capitales “nacionales”. Su política de guerra comercial con China ha sido el reflejo más directo de este nuevo ciclo. Sin embargo, este neo-mercantilismo a la Trump ha mantenido la misma línea de abandono social y laboral para la población. Ha sido una forma de fin del neoliberalismo que ha significado proteccionismo para las grandes corporaciones, pero desprotección total para la ciudadanía.

La cuarentena global del 2020, con sus predecibles efectos catastróficos mundiales, a nivel económico y social, tendrá consecuencias políticas profundas. Basta recordar que el fin de la Primera Guerra Mundial (y la epidemia de la gripe española de 1918) originó las primeras leyes de protección social masivas y permitió la feminización del trabajo. El derrumbe de la economía de 1929 permitió el ciclo keynesiano, y el fin de la Segunda Guerra Mundial generó el pacto de 1948, que se sintetizó en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es predecible que el 2020 generará un nuevo orden político donde la protección social ante los riesgos globales tendrá mayor importancia que la preservación de las “libertades negativas” que han primado en las últimas décadas. Si en los últimos años la ausencia de coacción externa al individuo ha sido el dogma, es previsible que el nuevo orden privilegiará una idea de libertad como garantía de autorrealización colectiva,

que obligue a subordinar las voluntades personales a un interés general mayor.

Mirada democrática

Desde una perspectiva socialista, este giro puede resonar positivo de forma a priori, pero también entraña riesgos elevados si no se conduce desde una mirada democrática y que tenga en cuenta las asimetrías y desigualdades de clase, raza, género y sostenibilidad ambiental. Sin este criterio de interseccionalidad, la realidad social y los límites políticos se delimitará bajo un modelo autoritario que identificará, una vez más, el “interés general” con el “interés de los poderosos”.

De alguna forma este nuevo orden político “autoritario-compasivo” ha avanzado en las últimas décadas, representado por el modelo chino, pero también está presente, con sus propias especificidades, en Singapur, Rusia, Turquía, Polonia o Hungría, por sólo dar algunos casos. Pierre Rosanvallon ha llamado a este tipo de regímenes políticos, como “iliberales”(1). El iliberalismo es, según este autor, “una cultura política que, por principio, descalifica la visión liberal”. Según el politólogo Matthijs Bogaards es “una situación de formalidad democrática en la que, sin embargo, se reduce o limita la independencia del poder judicial y los ciudadanos no disfrutan de la igualdad de trato ante la ley, ni protección adecuada frente al Estado o actores privados” (2). Es una nueva “fronterización de la vida” (3), en nombre del “interés nacional”, que se transforma en el nuevo criterio delimitador de las posibilidades de acción individual. Como ha observado el geógrafo David Harvey, en el actual contexto de crisis “las únicas políticas que funcionarán, tanto económica como políticamente, son mucho más socialistas que todo lo que Bernie Sanders pueda proponer y estos programas de rescate tendrán que iniciarse bajo los auspicios de Donald Trump, presumiblemente bajo la máscara del Making America Great Again” (4).

El Chile postcrisis

En Chile la crisis iniciada el 18 de octubre de 2019 ha supuesto el fin del espejismo creado con la consolidación

del régimen postdictatorial. Los felices '90, como auguró Stiglitz, plantaron “la semilla de la destrucción”. Por eso el estallido social, encapsulado en su performatividad callejera por la cuarentena, sigue su curso bajo nuevas formas de ingobernabilidad y conflictividad aguda que se explican por la baja legitimidad de las autoridades y del marco constitucional vigente.

Este marco general explica la llamativa ruptura histórica del bloque de derecha chileno. Se trata ante todo de un quiebre ideológico-estratégico que aplica en el terreno nacional el giro iliberal que se da en la política global. Esta división, va más allá del eje Rechazo-Apruebo, que visibiliza la línea divisoria formal. Es una grieta tectónica entre una derecha nostálgica, anclada en el dogma thatcherista-pinochetista, y una derecha que capta el vuelco hacia las formas “autoritario-compasivas” propias de la derecha iliberal, que empieza a ganar terreno en el plano global.

La expresión más clara y consolidada de esta nueva derecha en Chile se puede encontrar en el Instituto de Estudios de la Sociedad, centro de estudios que permite identificar este giro de forma muy nítida. Su reciente publicación “Primera persona singular” (5), publicado en noviembre de 2019, constituye un verdadero manifiesto en contra del individualismo, que se aleja de la conocida monserga “libertariana-anarcocapitalista” de los partidos de ese sector político. Esto augura un debate interesante y convergente de cara a la Convención Constituyente.

En el plano inmediato la propuesta de esta nueva derecha, centrada en reconstruir el concepto de “nación”, permite un debate cívico sustantivo con la izquierda. Sus ideas se pueden reflejar en la política que impulsan dirigentes como Mario Desbordes, Manuel José Ossandón, Germán Codina, y el “nuevo” Joaquín Lavín, amigo de todas las causas justas que encuentra en su camino. Sin embargo, es necesario advertir los nudos críticos que deberá enfrenar esta discusión en el momento en que se deba redactar la nueva Constitución:

1. “Principio de autonomía” versus “comunitarismo heterónomo”: Este punto de discrepancia se visibiliza en el rechazo que expresa el IES a los derechos sexuales

y reproductivos, entendidos como una demanda individualista, bajo la noción lockinana de soberanía sobre el propio cuerpo. De la misma forma oponen un intenso esencialismo ius naturalista que choca totalmente con el pensamiento feminista, que prioriza el principio de autonomía como soberanía política de las mujeres sobre sí mismas.

2. “Individualismo moral” o “individualismo propietario”: La crítica al individualismo que denota el IES es una crítica a la ruptura comunitaria de los lazos societales, para lo cual proponen, parafraseando a Karl Polanyi, reindustrializar moralmente la economía. La sospecha que surge desde la izquierda es por el “idealismo” de esa propuesta. Como criticaba Marx, esta derecha compasiva ve al pueblo desde el punto de vista de “la clase que más padece”, y no como una clase social que puede asumir poder, y desde la política imponer un cambio sistémico e institucional. No ven al pueblo como posible sujeto político. De fondo, el IES tiende a circunscribir su crítica al individualismo al plano pre-político, como déficit valórico o ético. No parecen advertir que la superación del individualismo no puede operar sin afectar la noción de propiedad privada que le es completamente inherente.

Estos dos puntos, en los que se plantean legítimas diferencias de políticas y valores, deberán marcar el campo de disputa fundamental en la Convención Constituyente, que delimite un nuevo consenso básico, que permita un pacto social, para la reconstrucción del Chile post estallido y post cuarentena. ◆

1. Pierre Rosanvallon (2001) “Fondements et problèmes de l’ “illibéralisme” français”, Académie des Sciences Morales et Politiques, Paris.

2. Matthijs Bogaards (2009) “How to classify hybrid regimes? Defective democracy and electoral authoritarianism”, en *Democratization*, 16:2, 399-423, DOI: 10.1080/13510340902777800

3. Sandro Mezzadra y Brett Nielson (2017) “La frontera como método”, *Traficantes de sueños*, Madrid.

4. David Harvey (2020) “Anti-Capitalist Politics in the Time of COVID-19” en *Jacobin*, <https://jacobinmag.com/2020/03/david-harvey-coronavirus-political-economy-disruptions>

5. Daniel Mansuy, Pablo Ortúzar, Manfred Svensson, Josefina Araos, Santiago Ortúzar, Gabriela Caviedes, Catalina Siles, y Claudio Alvarado (2019) “Primera persona singular”, Instituto de Estudios de la Sociedad, Santiago.

Chile y COVID-19: el sistema de salud y la disciplina social puestos a prueba

por Rafael Urriola U.*

El Ministro de Salud de Chile, Dr. Jaime Mañalich, cuando declaró este 25 de febrero “Tenemos uno de los mejores sistemas de salud del planeta tierra, eso es lo que yo he dicho”, probablemente no imaginó que esa aseveración sería sometida a la prueba de la práctica en menos de un mes y hasta que termine esta pandemia. No podrá argumentarse que la coyuntura del Covid-19 es un caso excepcional porque los sistemas de seguridad no se miden cuando flamea la calma, sino cuando se les tensiona: bomberos, Conaf, Fuerzas Armadas, policías, salud, etc. mal podrían ser evaluados cuando nada ocurre. La salud es un sistema de seguridad esencial para los países y cuya eficiencia, finalmente, se mide por la capacidad de prevenir, obtener resultados sanitarios y enfrentar crisis epidémicas o pandémicas.

¿Podrá enfrentar Chile mejor que otros países la crisis provocada por el Covid19? El presidente Piñera ha insistido en que en Chile se tomaron precauciones mucho antes que en Italia, aunque no se sabe cuáles fueron esas acciones. En todo caso tener una diferencia de alrededor de 60 días con respecto a los primeros contagios en los primeros países que presentaron el virus debiese permitir tomar acciones más efectivas. Las cifras oficiales de las proyecciones de la incidencia del Covid19 cambian día a día. Esto tiene particular importancia porque cambian las proyecciones de lo que el sistema deberá solventar.

Según consignó *cooperativa.cl* el 19.3.2020, el Gobierno trabaja con una hipótesis de propagación que plantea

*ECONOMISTA U. DE CHILE, MAGISTER ECONOMÍA PÚBLICA Y PLANIFICACIÓN U. DE PARIS X FRANCIA, ESPECIALISTA EN ECONOMÍA DE LA SALUD. ESTE TEXTO FUE PUBLICADO EN LA EDICIÓN CHILENA DE LE MONDE DIPLOMATIQUE, ABRIL 2020, BAJO EL TÍTULO "EL MEJOR SISTEMA DE SALUD DEL PLANETA TIERRA HACE AGUA". HA SIDO ACTUALIZADO POR EL AUTOR.

que, progresivamente, un millón ochocientas mil personas infectadas se irían confirmando a lo largo de 2020. Esta cifra sería una catástrofe total para el sistema. Las proyecciones actuales (18 de abril) son muchísimo más prudentes.

María Teresa Valenzuela, salubrista y epidemióloga que dirige el Consejo Asesor Covid-19 creado por el Ejecutivo, advierte que, alrededor del 85% de los infectados chilenos padecería la enfermedad en forma ambulatoria y sin mayores complicaciones y que un 15% requeriría hospitalización, aunque la hospitalización en los adultos mayores de 60 años puede ir de un 15 a un 27 por ciento. Asimismo, se estima que 5% de los contagiados necesitará acceder a ventiladores para subsistir.

De este modo la proyección del número de infectados es crucial. Como sea, las cuentas no son halagüeñas. En Chile hay 2,1 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes (en Italia 3,2) y se ubica en el penúltimo lugar de los países OCDE según las estadísticas oficiales de esa organización disponibles para 2017. La dotación total de camas en Chile es de 38.853 de las cuales 70% son administradas por el sector público, según datos del Observatorio Chileno de Salud Pública de la Universidad de Chile. Por lo demás, el uso normal de estas camas alcanza a cerca de 85% en promedio con lo que solo quedarán disponibles unas 5.000 para enfrentar la pandemia, aunque en casos de crisis se postergan intervenciones quirúrgicas no letales lo que amplía el margen. Tampoco se sabe exactamente hasta ahora cuanto es la disponibilidad de ventiladores y si será posible fabricarlos en el país para paliar la escasez a nivel mundial de estos aparatos.

Aun así, las voces prematuras de algunas autoridades afirmando que estamos preparados o que nos hemos preparado antes o mejor que Italia carecen de sentido. De hecho, Chile no solo no se ha preparado para situaciones como las que genera el Covid-19 sino que ha empeorado su capacidad para enfrentar estas circunstancias. En efecto, en la base de datos de la OCDE figura que el año 2000 el país disponía de 41.786 camas hospitalarias, es decir, se ha reducido en 7% la disponibilidad nacional, pese a

que hay más población y las listas de espera por cirugías en el sector público alcanzaban a 250.968 en marzo de 2019 como indicaba el ORD C 202 No 1972 enviado por la Subsecretaría de Redes a la Dipres en abril de 2019. Otro estudio (C. Rojas et al de 2015) concluye que en el sector público la reducción de camas es aún más pronunciada porque alcanza a -11,7% entre 2008 y 2014.

Una concepción privatizadora se ha empoderado de las autoridades sanitarias desde hace ya varios años. Luego de una recuperación de los indicadores de salud en la década de los 90, desde este siglo XXI el sector público de salud se ha deteriorado en cuanto a su capacidad de resolver las demandas sanitarias pese a que el 80% de la población sigue afiliada a Fonasa que, por lo demás, no solo cubre a los grupos pobres. En efecto, según la encuesta Casen de 2017, Fonasa atiende mayoritariamente a la población de los nueve primeros deciles de ingresos por lo que le corresponde una responsabilidad mayor.

El sistema se encuentra en crisis, tanto por el “esfuerzo” privatizador, como por una estrategia que deriva de una concepción según la cual la salud es un bien de mercado y no un derecho. En Italia, España y Francia los actuales presidentes han reconocido que este tipo de pandemias pueden enfrentarse mejor con un sistema público poderoso. Incluso EE. UU. ha puesto ingentes recursos para enfrentar los daños personales y económicos del virus.

En Chile, el gasto fiscal para salud entre 2003 y 2018 ha aumentado en 10% anual; el gasto total en salud lo ha hecho en 7,3% (todas cifras reales, es decir, eliminado el efecto precios). Esto hace que desde el año pasado (2019) el país ha superado el promedio de la OCDE de gasto en salud en lo que se refiere al Producto Interno Bruto, alcanzando 9,1%. Sin embargo, los resultados no parecen haber aumentado en una proporción similar. Más bien, existe una sensación que son los precios los que aumentan, pero no la cantidad o calidad de las prestaciones. Por ejemplo, estudios del Servicio Nacional del Consumidor registran diferencias de precios en los medicamentos de hasta siete veces. El precio del test del Covid-19 en el sector privado variaba entre 36.000 y 62.000 pesos según un

artículo de Ciper del 20 de marzo (esto sin contar los costos de la consulta de urgencia), en cambio, es gratuito en el sector público.

La discriminación no termina ahí, como relató J. Márquez Cervantes en twitter este 18.3.2020 quien pasó por un verdadero calvario para saber si su pareja estaba infectada. “No tuve respuesta en el call center público que estaba colapsado. Fuimos a una clínica privada (ella estaba cubierta por la gratuidad) pero yo pagué \$36.000 y pude saber antes que ella que estaba infectado y, en cambio, ella debió esperar 48 horas el resultado del examen. Ambos estuvimos más de 7 horas en la sala de espera de la clínica privada pudiendo haber infectado a otros pacientes que estaban allí por otras dolencias”. El sistema público y privado no parecen diferir en sus prácticas pero, obviamente, están lejos de ser modelos mundiales.

Si se quiere ser más eficiente que lo ocurrido en Italia valdría la pena examinar más de cerca lo que se hizo en ese país. Las autoridades italianas intentaban explicar las 3.405 muertes hasta el 19.3.2020 por la mayor longevidad de su población, afirma la economista italiana Giuseppina Da Ros. Alrededor del 22% de la población italiana, es decir casi 14 millones de individuos, tiene más de 65 años de edad. Cabe notar que en Chile, según el INE, en 2020 hay 2.358.616 personas mayores de 65 años y que esto representa el 12% de la población. Se dijo en Italia -explica Da Ros- que el problema afectó especialmente a los mayores de 80 años que presentan mayores comorbilidades. En Chile son casi 550 mil personas que podrían estar en esta situación de riesgo extremo.

Sin embargo, dice la analista Da Ros, no todos consideran que la edad sea el factor determinante del alto número de muertes en el país pues tendría más bien que ver con la tardanza en los controles (aislamientos, distanciamiento social y tests) que se estaban realizando. Según el profesor Cowling (epidemiólogo de la Universidad de Hong Kong), que comparó la situación italiana con la de Corea del Sur, este último país habría adoptado medidas de prevención y control más estrictas y basadas en la realización de tests a más de 10 mil personas por día; por tanto, muchas de

ellas que resultaron positivas presentaban síntomas leves y pudieron fácilmente ser atendidas a tiempo. Se evitó así que se transmitiera la infección a la comunidad y se saturaran los hospitales.

Como se señaló, al precio de \$36.000 en el sector privado chileno y sin que el sector público tome suficientes tests no parece posible que se podrá evitar una catástrofe mayor. El presidente Piñera entrevistado por la periodista S. Onetto, en cambio, dijo que este examen debía hacerse solo cuando se tienen los síntomas lo cual restringe de manera importante la necesidad de prevención para enfrentar la pandemia. El 17 de abril las autoridades sanitarias chilenas anunciaron que los tests podrán ser gratuitos para grupos de alto riesgo y que quedarán arancelados en Fonasa lo que significa que podrán hacerse incluso sin prescripción médica. Estos cambios, para algunos tardíos pero positivos, podrán reducir el impacto de la pandemia en el país.

La experiencia de Italia -continúa G. Da Ros- ha puesto en evidencia la necesidad de actuar con rapidez y en una etapa temprana, antes de que el número de casos llegue a niveles críticos y que se exija a los sistemas de salud mucho más de sus reales capacidades de respuesta. Esto es que los médicos han tenido que adoptar rutinas de “tiempos de guerra” y tomar decisiones difíciles sobre las prioridades en el cuidado intensivo de los enfermos.

En Chile, hasta el 21 de marzo el Ministro de Salud se oponía férreamente a una cuarentena, pese a que en numerosos países (Italia, Francia, España, Argentina y otros países de América) se había adoptado tal medida. Más aún, alcaldes de las comunas “dormitorios” de la Región Metropolitana apoyaban e insistían en la necesidad de esta medida. Los alcaldes argumentan que las aglomeraciones que presenta el transporte público que lleva a los habitantes de esas comunas hacia los lugares frecuentes de trabajo asegura una velocidad de contagio exponencial si alguno de los pasajeros fuese portador del virus. El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, la comuna más poblada de Chile, pese a pertenecer a la coalición gobernante, discrepó públicamente con el Ministro del Interior

y el de Salud por no querer decretar la cuarentena total, que también es apoyada por el Colegio Médico de Chile. Finalmente, también hubo cambios en favor de cuarentenas parciales y focalizadas que son la mejor solución para no agregar un descalabro económico al sanitario, siempre que se combine con comportamientos rigurosos de distanciamiento social, uso de mascarilla y ampliación de la toma de tests de contagio.

En realidad, estas medidas han sido tomadas con retraso lo que podría potenciar la expansión de la enfermedad y el número de fallecidos pero, en cambio, pareciera que están dando resultados en algunas comunas. A diferencia de otros países pareciera que la población ha aumentado su conciencia frente a la pandemia y asume, en la medida de lo posible, las sugerencias sanitarias. Algunos cálculos preliminares, al menos indican que la explosión del contagio no ha seguido la línea exponencial de crecimiento de Estados Unidos en que además de lo tardío de las medidas, a instancias del propio presidente no se tomó la pandemia con la seriedad necesaria.

El gobierno parecía frotarse las manos cuando apareció el Covid-19 porque, gracias al llamado del Colegio Médico, se apaciguaron las protestas que ya duraban cinco meses, día tras día. Sin duda si se logra resultados positivos en la resistencia a la propagación del virus mejorará la imagen gubernamental, como sucedió con el rescate de los mineros pero, de otra parte, la crisis sanitaria reforzó la idea de que el carácter del sector privado en la salud exacerbando el lucro en la coyuntura y las regulaciones que impiden el actuar del Estado (todas materias que podrán modificarse constitucionalmente) entorpecieron las posibilidades de enfrentar estas crisis. ◆

R.U.

Pandemia: Una excusa para la represión

por Libio Pérez*

“El 50 por ciento de quienes cometen delitos ha pasado alguna vez por el sistema de Sename”, dijo en reiteradas ocasiones el abogado Jaime Campos mientras fue ministro de Justicia en el segundo gobierno de Michelle Bachelet (1), aludiendo a estudios internos realizados por Gendarmería de Chile, el organismo que está a cargo de las más de 130 mil personas que -bajo distintas modalidades- están bajo su custodia (2).

Según informaciones oficiales de Sename, en 2017 la institución atendió en sus distintos programas a casi 200 mil niños, niñas y adolescentes (3) la mayoría de ellos en el área de protección de derechos. Este es el universo aproximado al que la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) buscaba llegar y obtener información según el acuerdo suscrito entre ambas instituciones a través de un convenio (4) que buscaba dar “acceso (a la) información que posee Sename y que la ANI considere relevante y pertinente para generar inteligencia, estableciéndose una alianza estratégica de cooperación institucional”. A poco andar fue desestimado por el fuerte rechazo que concitó y por las flagrantes vulneraciones de derechos que suponía tal acuerdo (5).

Ni el documento, ni las autoridades a cargo explicaron con transparencia el objetivo preciso del traspaso de informaciones de la niñez vulnerada hacia el organismo de inteligencia, que no fuera la extendida sospecha que se trataba de un mecanismo de control anticipatorio de quienes eventualmente podrían cometer delitos. No solo

*EDITOR GENERAL DE LA EDICIÓN CHILENA DE LE MONDE DIPLOMATIQUE. ARTÍCULO PUBLICADO EN LA EDICIÓN CHILENA DE LE MONDE DIPLOMATIQUE MAYO DE 2020.

porque es extendida la apreciación del exministro Campos que asocia la vulnerabilidad de la población de Sename con la eventual comisión de delitos, sino también porque fue extendida la creencia que parte de la llamada “Primera línea” de las protestas estaba integrada por niños vinculados a Sename.

El episodio ANI-Sename es apenas un ejemplo de cómo las autoridades, desde distintos niveles, aprovechan el shock que ha impuesto la pandemia para avanzar en políticas de control de la población. Se trata de medidas que limitan libertades, acotan derechos, y que -en la medida de lo posible- buscan instalar una visión autoritaria para encarar los problemas sociales y políticos que se pusieron en evidencia con la rebelión de octubre y que han permanecido pese a la crisis sanitaria.

En esa línea, una carta al diario *El Mercurio* alertó sobre el envío al sur del país de efectivos del Ejército especializados en contrainsurgencia, suscrita por un general retirado de esa fuerza y que en el pasado tuvo participación en los organismos represivos de la dictadura. Aunque el hecho fue reiteradamente desmentido por las autoridades regionales de la Araucanía, no pasó inadvertido el escenario de mayor control de esa zona derivado de acciones de propaganda de grupos activos de la causa mapuche.

Los hechos son coincidentes con el uso más intensivo de la fuerza militar en las calles de las grandes ciudades chilenas, ya no solo custodiando instalaciones “estratégicas”, como indica el decreto que impuso el Estado de Catástrofe dictado por el gobierno, sino también en el control directo de la ciudadanía.

Ocurrió a mediados de abril, cuando una patrulla militar en la ciudad nortina de Calama detuvo a ocho personas durante el toque de queda, y en vez de entregarlas a Carabineros -como dicta el reglamento del Estado de Excepción- o pasarlas a control de lesiones, las llevaron y abandonaron en el desierto. Seis militares, incluido el oficial a cargo de la patrulla, fueron formalizados ante la justicia (6).

“Las facultades de emergencia no deberían ser un arma que los gobiernos puedan utilizar para sofocar la disiden-

cia, controlar a la población e incluso perpetuar su tiempo en el poder”, alertó desde Ginebra la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en relación a una tendencia global, que también se reflejaba en Chile (7).

Es notorio el esfuerzo de las autoridades chilenas para dejar “clavadas banderas” de su ideario neoliberal y autoritario, ya no solo en el escenario económico, con la precarización del empleo y la vida, el salvataje a las grandes empresas incluidas las de los grupos económicos, el traspaso del costo de la crisis a los trabajadores, sino también en una mayor restricción de las libertades, la imposición de dispositivos represivos y en la clara intencionalidad de hacer permanente el Estado de Excepción. ◆

1. Jaime Campos fue ministro de Justicia entre 2016 y 2018.

2. Ver Estadísticas de Gendarmería en <https://www.gendarmeria.gob.cl/estadisticaspp.html>

3. Ver Cuenta Pública en <https://www.sename.cl/web/index.php/2018/06/20/casi-200-mil-ninos-ninas-y-adolescentes-fueron-atendidos-por-la-red-sename-durante-2017/>

4. Ver contenidos del convenio en <https://www.infogate.cl/2020/04/24/centros-de-estudios-de-la-oposicion-rechazan-acuerdo-ani-sename-y-piden-dejarlo-sin-efecto/>

5. Ver <https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/organismos-del-estado/gobierno-pidio-dejar-sin-efecto-el-polemico-convenio-sename-ani/2020-04-27/105749.html>

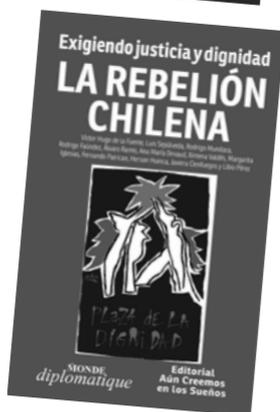
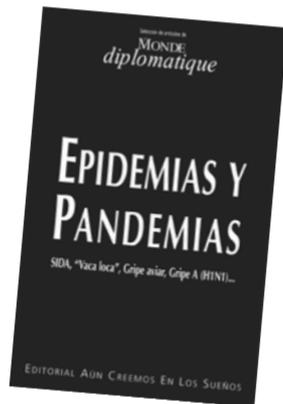
6. Ver https://www.cnnchile.com/coronavirus/militares-abandono-personas-desierto-toque-de-queda_20200418/

7. Ver La Jornada <https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2020/04/27/repudia-onu-la-violencia-policia-durante-confinamiento-1845.html>

L.P.

Libros publicados por la Editorial Aún Creemos en los Sueños

La escuela en movimiento
La violencia y la lucha social
La rebelión chilena
Corrupción
Wallmapu colonizado
¿Cómo enfrentamos el cambio climático?
El futuro del trabajo
La escuela en tiempos de migración
Episodios históricos
Crisis en la Iglesia católica chilena
Cuentos de lo indecible
Chalecos amarillos. Sublevación en Francia
Blanco y negro muy negro de Guillermo Nuñez
Estudiantes migrantes en escuelas públicas chilenas
Derechos de los animales
Medioambiente y desarrollo
Revolución feminista
Datos históricos sobre la Democracia Cristiana, Jorge Magasich
Lucha mapuche. En la huella de Matías Catrileo
Noam Chomsky. Cinco entrevistas
Los combates del feminismo
Inmigrantes y refugiados
La revolución rusa
Federica Matta. Manifiesto de autoeducación artística
La resistencia zapatista
Reforma agraria
Siria
Pueblo mapuche y autodeterminación
Otra política es posible
El derecho a la rebelión
Desarrollo sustentable
El viaje de los imaginarios en 31 días por Federica Matta
Manuales escolares
Democratizar las comunicaciones
A cambiar el modelo
Que la audacia cambie de lado Serge Halimi
Videojuegos
Jacques Derrida
Una historia que debo contar por Luis Sepúlveda
Allende, discursos fundamentales
Crónicas de Luis Sepúlveda
Le Monde Diplomatique. Más que un periódico



Libros en venta en librerías y en Le Monde Diplomatique, San Antonio 434, Santiago.
Teléfono (56) 22 608 35 24 - **Por internet en www.editorialauncreemos.cl**

**Este libro se terminó de imprimir en el mes de mayo de 2020 en
Gráfica LOM, Concha y Toro 29 - Santiago centro - Chile**